



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

Brasil.....	2
Colombia.....	3
Costa Rica.....	4
España.....	5
Ecuador.....	6
Perú.....	7
Portugal.....	8
República Dominicana.....	9
Tribunal Europeo De Derechos Humanos.....	10
Venezuela.....	11



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 5- AJ Brasil

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

BRASIL

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha publicado el texto completo del "Acórdão" del [Habeas Corpus n. 82424 - RS](#), que se refiere a la noción constitucional del crimen de racismo.

Esta decisión, como otras, pueden ser accedidas en la [página web del STF](#).

Una vez en esta página basta con introducir la palabra "racismo" y hacer click en "Acórdãos". Para ver la providencia se hace click sobre el número del proceso.

Datos aportados por Paulo Gomes Pimentel Júnior



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 5- AJ Colombia

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

COLOMBIA

Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional. Por medio de la cual se establecen las pautas mínimas de protección a los derechos fundamentales que el Gobierno Nacional debe seguir en la política de protección integral a la población internamente desplazada. 22 de enero de 2004.

Comentario de Beatriz Eugenia Sánchez:

La sentencia T-025 de 2004 analiza la situación en la que se encuentran los más de dos millones de colombianos que han sido forzados a abandonar sus hogares, por los diversos actores armados que operan en el conflicto interno que afronta el país desde hace décadas.

Pese a que Colombia cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de protección y asistencia a los desplazados internos (contenida en la Ley 387 de 1997 y sus decretos reglamentarios), la sentencia considera que el incumplimiento reiterado por parte de las autoridades de esta normatividad se ha traducido en un estado de cosas inconstitucional. Este obedece tanto a la falta de recursos para implementar las disposiciones normativas, como a la incapacidad institucional para hacerlas efectivas.

El fallo recuerda que, tal y como se había establecido en la sentencia SU-1150 de 200, el gasto destinado a la atención de esta población es prioritario - incluso por encima del gasto público social - de manera que existe la obligación de efectuar las apropiaciones necesarias para garantizar la protección de estas personas. En consecuencia, se ordena al Consejo Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia que "asegure la coherencia entre las obligaciones fijadas por las autoridades competentes y el volumen de recursos efectivamente destinados a proteger los derechos de los desplazados". Este organismo deberá, así mismo, estudiar si los compromisos actuales del Estado pueden ser cumplidos, en caso de que determine que ello no es posible deberá redefinirlos, dando la oportunidad a los representantes de los desplazados para que participen en el proceso de definición de la nueva política.

En cualquier caso, establece la sentencia, el Estado está en la obligación de asegurar a los desplazados internos unos derechos mínimos. De manera que tienen derecho al respeto al núcleo básico de sus derechos fundamentales constitucionales y a la satisfacción de los mínimos prestacionales que les permitan desarrollar una vida digna. El Estado también tiene la obligación de apoyarles en el proceso de restablecimiento socio-económico, de manera que los desplazados cuenten con ayudas que les permitan recrear su proyecto de vida y recuperar su capacidad de sostenimiento. Finalmente, respecto al derecho al retorno y restablecimiento, los desplazados tienen derecho a no ser forzados a volver al lugar del que provienen, a contar con información veraz y oportuna de las condiciones en las que se desarrollará el retorno y a que el Estado les garantice las condiciones de seguridad y dignidad necesarias para que puedan reiniciar su cotidianidad.

La sentencia resulta ser de gran interés pues, por una parte, resume la posición de la Corte frente a los derechos de las víctimas de los éxodos forzados internos, a la vez que determina cual es el papel de la Corte Constitucional dentro del diseño de la política de protección y asistencia a este colectivo.

Ver la sentencia



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 5- AJ Costa Rica

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

[COSTA RICA](#)

[Sentencia N° 2004-01603. de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.](#) Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta por un grupo de diputados sobre el proyecto de "Modificación de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley número 7331 del trece de abril de mil novecientos noventa y tres". Con salvamentos de voto de los Magistrados Mora Mora, Vargas Benavides, Armijo Sancho, Solano Carrera, Calzada Miranda y Jinesta Lobo. 17 de febrero de 2004

[Ver la sentencia](#)



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 5- AJ Ecuador

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

ECUADOR

ACCIONES DE AMPARO SOBRE SALVAGUARDIAS ARANCELARIAS EN ECUADOR

Desde el 2001 han ingresado al Tribunal Constitucional del Ecuador 50 acciones de amparo constitucional sobre salvaguardias arancelarias. La mayor parte de ellas durante el 2003 con 42 causas, no todas resueltas aún.

La República del Ecuador, mediante diversos Decretos Ejecutivos de los años 1997, 1998 y 1999, introdujo unilateralmente modificaciones al Arancel Externo Común, puesto en vigencia por la Comunidad Andina mediante Decisión 370 de 26 de noviembre de 1994, con la imposición de salvaguardias a las importaciones de bienes y servicios. Personas naturales y jurídicas que realizaron importaciones durante la vigencia de tales Decretos Ejecutivos debieron satisfacer las salvaguardias arancelarias establecidas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conociendo la demanda planteada por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, mediante sentencia dictada en el proceso 7-AI-98 de 21 de julio de 1999, declaró que el cobro de las mencionadas salvaguardias se había realizado de manera ilegal. Los importadores reclamaron administrativamente por pago indebido a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, institución del Estado que negó la devolución del dinero con el argumento de que los Decretos Ejecutivos que imponían las salvaguardias se encontraban vigentes al momento en que fueron cobradas.

Dos tesis se han desarrollado en el Tribunal Constitucional respecto a este tema:

La primera que acepta las acciones de amparo considerando que los derechos de los actores se encuentran consagrados en el Acuerdo de Cartagena, instrumento internacional que forma parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalece sobre leyes y otras normas de menor jerarquía de conformidad con la Constitución Política del Ecuador, por lo que los actos administrativos impugnados son ilegítimos al ser consecuencia de la contravención al ordenamiento jurídico vigente; violan el derecho a la propiedad consagrado en el Art. 23 numeral 23 de la Constitución Política del Estado; y, causan daño grave e inminente a los actores al no permitirles disponer de los recursos que legalmente les corresponde;

La segunda que considera que la acción de amparo es una garantía constitucional cautelar de los derechos fundamentales, y que al tratarse de la imposición ilegal de un tributo no le compete suplir los procedimientos específicos que el ordenamiento jurídico ha establecido para la repetición de lo pagado indebidamente. Al haberse acudido al reclamo administrativo se debió continuar con la vía contencioso tributaria para solucionar las controversias habidas entre los actores y la autoridad aduanera; y, que no se produce violación de los derechos reclamados como son los de la libertad de empresa, seguridad jurídica y debido proceso, por lo que niega las acciones propuestas.

La tesis que ha venido prevaleciendo es la segunda, puesto que el Pleno del Tribunal Constitucional, en opiniones divididas, que han terminado con votaciones de cinco contra cuatro, ha optado por ésta.

RESOLUCION Nro. 151-03-RA Con salvamento de voto de los doctores Rene de la Torre Alcivar, Milton Burbano Bohórquez y Mauro Terán Cevallos. 1 de julio de 2003.

Ver la resolución

RESOLUCION Nro. 318-2003-RA Con salvamento de voto de los doctores Miguel Camba Campos, Genaro Eguiguren Valdivieso, Jaime Nogales Izurieta y Oswaldo Cevallos Bueno. 29 de octubre de 2003.

Ver la resolución

RESOLUCION Nro. 046-2003-RA. Con salvamento de voto de los doctores Miguel Camba Campos, Jaime Nogales Izurieta, Luis Rojas Bajaña y Oswaldo Cevallos Bueno. 6 de noviembre de 2003.

Ver la resolución

RESOLUCION Nro. 453-2003-RA Con salvamento de voto de los doctores Milton Burbano Bohórquez, Enrique Herreria Bonnet y Mauro Teran Cevallos. 6 de noviembre de 2003.

Ver la resolución

Presentación elaborada por Ramiro Rivadeneira Silva
Asesor Jurídico del Tribunal Constitucional del Ecuador



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 5- AJ Espana

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

ESPAÑA

CONDENA POR RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO.

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, mediante sentencia de 23 de enero de 2004, ha condenado a once de los doce Magistrados del Tribunal Constitucional como responsables civiles al pago a un Abogado de 500 € cada uno por haber desestimado un recurso de amparo “al no dar respuesta lógica a la pretensión de amparo”, tratándose de una resolución dictada de forma negligente, aunque sin apreciar dolo. A la sentencia se adjunta un voto particular discrepante. La insólita decisión plantea múltiples cuestiones tanto de tipo institucional, como procesal, suscitando problemas teóricos y prácticos que, sin duda, deben dar lugar a abundantes comentarios.

Pocos días después, el Pleno del Tribunal Constitucional aprobó un Acuerdo en el que acuerda “Declarar que las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en los recursos de amparo no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano del poder judicial dado que sólo a este Tribunal corresponde, conforme a la Constitución y a su Ley Orgánica, resolver tales recursos” y “declarar que el enjuiciamiento de las resoluciones recaídas en recursos de amparo, realizado por vía de la acción de responsabilidad civil, constituye una invasión de la jurisdicción, exclusiva y excluyente, atribuida a este Tribunal Constitucional por la Constitución

Sentencia Nº 51/2004. Por medio de la cual se establece la responsabilidad civil de los magistrados del Tribunal Constitucional. 22 de enero de 2004 con salvamento de voto de Francisco Marín Cantán.

[Ver la sentencia](#)

Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional. 3 de febrero de 2004.

[Ver el acuerdo](#)

Presentación elaborada por Pablo Pérez Tremps.



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 5- AJ Peru

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

PERÚ

[Sentencia del Tribunal Constitucional \(TC\)](#) - Expediente N° 2196-2002 HC/TC. Lima 10 de diciembre de 2003.

[Ver la sentencia](#)

[Sentencia del Tribunal Constitucional \(TC\)](#) – EXP. N° 0013-2003-CC/TC. Lima, 29 de diciembre de 2003

[Ver la sentencia](#)

[Sentencia del Tribunal Constitucional \(TC\)](#) - Exp. N.º 015-2001-AI/TC, Exp. N.º 016-2001-AI/TC, Exp. N.º 004-2002-AI/TC. Con fundamento singular del Magistrado Manuel Aguirre Roca. Lima, 29 de enero de 2004

[Ver la sentencia](#)

[Sentencia del Tribunal Constitucional \(TC\)](#) - Exp. N.º 2488-2002-HC/TC. Lima, 18 de marzo de 2004.

[Ver la sentencia](#)



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 5- AJ Portugal

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

[PORTUGAL](#)

[ACÓRDÃO N.º 144/2004](#). Sobre prostituição, exploração sexual e relações entre Direito e Moral. 10 de Março de

Ver el acuerdo

Fallo aportado por Antonio de Araujo



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 5- AJ Rep Dominicana

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

REPÚBLICA DOMINICANA

Resolución número 1920-2003. Mediante la cual la Suprema Corte dispone un conjunto de “medidas anticipadas” para la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Dominicano. 13 de noviembre de 2003

[Ver la resolución](#)

Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 20 de enero de 2004. Declara la no conformidad con la Constitución del artículo 217 del Código de Justicia Policial en lo relativo a la prohibición de aplicación de las leyes que instituyen el procedimiento de habeas corpus en los tribunales de justicia policial

[Ver la sentencia](#)

Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 10 de febrero de 2004. Sobre la acción en interpretación o declaratoria de constitucionalidad o no del proyecto de ley tendente a la reforma de la Ley Electoral No. 275-97 en lo que concierne a la elección del nivel presidencial mediante el voto preferencial, introducida por el Presidente del Senado

[Ver la sentencia](#)

Sentencias aportadas por Cristobal Rodríguez



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 5- AJ Tribunal Europeo

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Depiets vs. Francia, 10 de febrero de 2004 (no violación del art. 6)

Presentación de Dunia Marinas Suarez.

En el asunto DEPIETS vs. FRANCIA, el TEDH vuelve a tratar el tema de la imparcialidad de los jueces y, más en concreto, su contaminación o no por haber sido miembros integrantes de órganos jurisdiccionales que hubieran podido dirimir determinados aspectos del litigio en primera instancia. De modo que su análisis va a centrarse en el propio contenido de las tareas realizadas por el juez cuya imparcialidad es cuestionada. En el asunto en cuestión, la actividad de los jueces resultaba ser materialmente distinta a la desarrollada en la instancia a quo, ya que habían llevado a cabo un juicio sobre la legalidad de la investigación, y por contra, cuando los mismos jueces actuaron en el seno del Tribunal de Casación, se centraron estrictamente en la legalidad del fallo recurrido.

Ver la sentencia

Görgülü vs. Alemania, 24 de febrero de 2004 (violación del art. 8 y no violación del art. 6)

Presentación de Dunia Marinas Suarez.

En este trimestre destacamos el asunto GÖRGÜLÜ vs. ALEMANIA, donde el demandante reclama frente al Estado alemán por no permitirle establecer un vínculo con su hijo, quien había sido dado en adopción por la madre cuando nació. El niño, claro está, había nacido fuera de vínculo matrimonial alguno. El TEDH concluye que los razonamientos del tribunal de apelación partían de una premisa equivocada, dado que daba más importancia a la relación del menor con sus padres adoptivos, sin considerar que la anulación total de toda relación de un hijo con su verdadero padre únicamente puede ser justificada en circunstancias excepcionales, que no se dan en el caso. El tribunal de distrito había por el contrario considerado más adecuado el que el Sr. Görgülü pudiera progresivamente lograr establecer un vínculo continuado con el menor que condujera a su eventual custodia. En definitiva, el art. 8 del CEDH exige a los Estados la obligación de intentar reunir al padre natural con su hijo y, para ello, disponen de un margen de actuación lo suficientemente amplio como para optar por la medida más adecuada que permita reconciliar tanto los derechos del padre natural, aunque éste no haya tenido nunca un contacto con el menor como en el caso, como el de los padres adoptivos, si es que ya los hubiera, siempre salvaguardando los derechos del propio menor.

Ver la sentencia

Glass vs. Reino Unido, 9 de marzo de 2004 (violación del art. 8) Con opinión particular del juez Casadevall.

Presentación de Dunia Marinas Suarez.

El tercero de los pronunciamientos, que incluso tuvo cierta trascendencia en los medios de comunicación, es el asunto GLASS vs. REINO UNIDO, donde el TEDH considerará como una intromisión inaceptable al derecho a la vida privada y por extensión a la integridad física de uno de los demandantes (los demandantes son madre e hijo), el que las autoridades médicas del hospital donde se encontraba internado el hijo de la Sra. Glass procedieran a aplicar un determinado tratamiento médico, aun sabiendo la oposición frontal al mismo de la madre del paciente, sin acudir previamente a la autoridad jurisdiccional para que valorara la situación.

El asunto plantea la disyuntiva entre optar por aplicar un determinado tratamiento sanitario que con un determinado objetivo médico (paliar el sufrimiento actual del paciente) puede al mismo tiempo provocar otra serie de daños colaterales, e incluso acelerar el final de quien los recibe o, por el contrario, atender a la negativa del tutor del paciente, a sabiendas de que ello puede perjudicar e incluso aumentar el sufrimiento del paciente. Planteada esta disyuntiva en términos absolutos, lo cierto es que la vida o calidad de vida del enfermo parecería ser el argumento determinante, si bien, en tales circunstancias, y es en definitiva lo que nos lleva a destacar este fallo, el análisis o la valoración de los derechos en juego debería ser en todo caso realizado por un tribunal. El que las autoridades sanitarias aplicaran, ciertamente por el bien de la salud del paciente, un determinado tratamiento sin contar con el sustento previo de la valoración realizada por un juez independiente, determina que esa intervención sanitaria equivalga a una vulneración del derecho a la vida íntima y a la integridad física de los que recurren.

Ver la sentencia

Gobierno Vasco contra el Reino de España, inadmisión de la demanda. 3 de febrero de 2004.

Presentación de Dunia Marinas Suarez.

Si bien no es una sentencia, destacamos el auto por el cual se decreta la inadmisibilidad de la demanda planteada por el ejecutivo vasco con motivo de la Lev de Partidos. Como era esperable, el TEDH ni siquiera entró en el fondo sino que se limitó a aplicar su doctrina consolidada en materia de legitimación activa.



Revista del Foro Constitucional Iberoamericano

Revista 5- AJ Venezuela

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

VENEZUELA

En el mes de marzo se produjeron dos importantes decisiones en el Tribunal Supremo de Justicia Venezolano, con amplia repercusión en el terreno político. Ambas con ocasión de la convocatoria, por parte de la oposición, a un referéndum revocatorio presidencial y de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de someter a revisión una parte importante de las firmas obtenidas, por considerar que poseían caligrafía similar.

La primera de las sentencias fue producida por la Sala Electoral, la cual ordenó al CNE desaplicar la medida sobre las firmas sospechosas y considerarlas válidas, lo que hacía inminente la celebración del referéndum. Nueve días más tarde la Sala Constitucional de la misma Corporación anuló el anterior fallo, considerando que la Sala Electoral se había extralimitado en sus funciones y violado el debido proceso.

[Sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.](#) 15 de marzo de 2004.

[Ver la sentencia](#)

[Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.](#) 23 de marzo de 2004.

[Ver la sentencia](#)

[Sentencias aportadas por Beatriz Eugenia Sánchez](#)

© U N I V E R S I D A D · C A R L O S I I I · D E · M A D R I D